

### **Cacería de huachicoleros**

De acuerdo con una encuesta realizada por el diario El Financiero, 89% de los habitantes del país respalda la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el huachicolero; según otra de ellas, realizada por Consulta Mitofsky, el porcentaje llega a 56%. El común denominador, sin embargo, se ubica en la esperanza de final feliz de la pesadilla.

Estamos hablando de cortar de tajo las mil cabezas de la hidra que florecieron en el reino de la impunidad de tres sexenios, paradójicamente con epicentro al interior de la empresa saqueada. Por lo pronto, mientras el Servicio de Administración Tributaria ya detectó a 194 personas físicas y morales dedicadas a la distribución de combustible que omitieron tributos por 3 mil 212 millones de pesos, al no empatar el abasto de gasolinas por parte de Pemex con los litros de venta detectados en las bombas.

De hecho, están en proceso de congelación 200 cuentas, en adición a 15 bloqueadas y el descubrimiento de 24 relacionados. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, está por consignar al Ministerio Público Federal a cinco presuntos lavadores de dinero proveniente del saqueo a Pemex, en cuya lista se ubican tres empresarios, un exalcalde y un exdiputado local.

La pesquisa apunta a operaciones por 10 mil millones de pesos, en un marco de apertura de cuentas en el exterior, compra de inmuebles a nombre de los involucrados y familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte. El mayor índice de irregularidades se ubica en Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Baja California, Jalisco, Puebla y la Ciudad de México.

En el caso de Pemex hay tres funcionarios sujetos a investigación, en una maraña que alcanza desde subdirectores corporativos hasta directores de refinerías que vendían a trasmano supuestos excedentes que según ellos podrían evaporarse. En la emergencia; se utilizarán mil policías que hacían funciones de guardaespaldas de políticos y empresarios.

En el río revuelto se culpa al actual gobierno de haber frenado las importaciones de combustible desde un ángulo, y desde otro se reclama el mantener decenas de barcos varados en puertos con gasolinas enviadas del exterior. Por lo pronto, ya se firmó un pacto con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga para participar en la distribución. La poda de la corrupción

**¿Y el acero?** Ante el ya largo paréntesis de cara a la promesa de negociar con Estados Unidos la desaparición del impuesto global a las exportaciones de acero, tras concluir la negociación del Acuerdo Mercantil con ese país y Canadá, las firmas siderúrgicas locales amenazan con realizar recortes de personal. Tanto Altos

Hornos de México, como Tenaris-Tamsa, Deacero, ArcelorMittal y Ternium canalizan 76% de sus exportaciones a Estados Unidos y Canadá. En varias ocasiones la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero se ha reunido con funcionarios de la Secretaría de Economía para solicitar que se realice una presión espejo, es decir que a su vez el país castigue a las exportaciones de acero de Estados Unidos con el mismo arancel de 25%. El anterior titular Ildelfonso Guajardo, bateó durante meses la posibilidad.

**COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Enero 15 del 2019**

### ***Las facturas económicas del desabasto***

Si algún afectado por el desabasto de combustibles se atreve a expresar públicamente su molestia, rápidamente es calificado como cómplice y enemigo de la patria. Porque el discurso oficial equipara a la decisión gubernamental de cerrar los ductos de gasolina con la decisión de Lázaro Cárdenas de expropiar la industria petrolera. Pero más allá de las horas perdidas en la espera que nunca se podrán contabilizar o de los derrames de bilis que habrán afectado a miles de hígados de los automovilistas frustrados, hay facturas que habrán de traspasarse a diferentes indicadores de la economía mexicana.

La determinación presidencial de combatir el robo de combustibles generando una escasez a través de la interrupción de su distribución en ciertas partes del país, elegidas de manera totalmente arbitraria, va a dejar huella económica. No hay hasta ahora una sola justificación válida y contundente para haber suspendido el suministro de combustibles. Todas las acciones descritas por la autoridad, desde las financieras y fiscales hasta las policiales, pudieron haber sido emprendidas sin afectar así las economías personales y regionales. Incluso, la cifra que el propio gobierno federal ha dado a conocer sobre el número de gasolineras involucradas en la venta de huachicol, ligeramente superior a 1% de todas las estaciones de servicio del país, abre dudas sobre los alcances de la radical acción de cancelar la distribución de forma tan extendida.

Esto abre muchas dudas, muy razonables, sobre los verdaderos motivos del desabasto. Sobre todo, cuando la bandera enarbolada por el propio presidente para justificar la falta de gasolinas en la Ciudad de México giró repentinamente hacia el sabotaje a un ducto. En la conferencia matutina se anunció que finalmente se reabrirán los ductos, sin saber realmente si ya se sellaron todas las tomas clandestinas en el camino, sin tener la garantía de que las miles de carpetas de investigación de las que se habla terminarán con capos del crimen organizado tras las rejas.

La falta de combustibles en amplias zonas del centro y norte del país ha generado la pérdida de millones de horas hombre, el encarecimiento de productos básicos por problemas de logística o simple especulación y una notable baja en la actividad económica de la región más industrializada y dinámica de toda la República Mexicana. Una primera lectura del impacto económico de esta determinación

vendrá con la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor y los subíndices y mediciones regionales que hace el Inegi de la inflación.

Ciertamente, se esperan impactos regionales, pero pueden tener repercusiones en la medición general que se mantiene fuera del rango que acepta el Banco de México. Ya sabemos que Banxico está en alerta por este tema. Porque, además, el banco central está atento del impacto en enero que puedan tener otras determinaciones gubernamentales como subir precios y tarifas y el aumento al salario mínimo nacional. La falta de gasolina ha interrumpido muchas cadenas productivas en la región del Bajío que podrían pasar factura al desempeño industrial y de otros sectores primarios y terciarios. Esto puede impactar, por ejemplo, el Índice de Producción Industrial y la balanza comercial.

Y está el factor confianza que es determinante para mantener el buen desempeño económico. Este episodio ha contribuido a ahondar en la polarización social, con todo y golpes por unos litros de gasolina, ha dejado al descubierto la falta de preparación de muchos de los responsables de áreas estratégicas en el gobierno y ha revelado que la economía mexicana puede enfrentar problemas que hasta hace poco tiempo ni siquiera imaginábamos, como la escasez.  
[ecampos@eleconomista.com.mx](mailto:ecampos@eleconomista.com.mx)